



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

Medellín, Veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE:	BEATRIZ EUGENIA GÓMEZ CORTÉS.
DEMANDADOS:	EM AS JE S.A.S. en liquidación y OTROS.
VINCULADAS:	EPS SURA y PROTECCIÓN S.A.
TIPO DE PROCESO:	ORDINARIO.
DECISIÓN:	CONFIRMA.

En la fecha, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, se reunió para resolver el recurso de apelación presentado en el Proceso Ordinario Laboral adelantado por la señora **BEATRIZ EUGENIA GÓMEZ CORTÉS** en contra de **EM AS JE S.A.S.** en liquidación, **INVERSIONES PARA EDUCAR S.A.S.** en liquidación, **JUAN ESTEBAN SANÍN GÓMEZ, ANTONIA SOFÍA SANÍN GÓMEZ, EULALIA MARÍA SANÍN GÓMEZ y JOHNATAN SANÍN MACÍAS** como herederos determinados del señor **IGNACIO SANÍN BERNAL, MARÍA ESTELLA GÓMEZ DE SANÍN** en calidad de cónyuge de este, los herederos indeterminados del mismo y las vinculadas **EPS SURA y PROTECCIÓN S.A.** contra la decisión proferida el 19 de enero de 2021, por el Juzgado del conocimiento.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA:

DEMANDANTE.

Solicita que se confirme el Auto impugnado, argumentando que la parte demandada ya tuvo la oportunidad de hacer uso de las figuras jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico para convocar al proceso a las sociedades del grupo **SANÍN**, sin que sea este el momento para alegar su ausencia; siendo lo apelado un asunto de legitimación en la causa que se debe resolver en la sentencia. Frente a la aplicación del artículo 121 del Código General del Proceso -C.G.P-, expone que además de lo arduo del trámite para la notificación de la demanda, no se puede pasar por alto que el Juzgado del conocimiento no ha sido un modelo de estabilidad laboral, detallando los nombres de personas que han regentado el mismo desde el año 2017 en adelante. Finaliza solicitando que se condene en Costas Procesales a los recurrentes.

INVERSIONES PARA EDUCAR S.A.S. y ANTONIA SOFÍA SANÍN GÓMEZ.

Exponen que se debe aplicar el término perentorio dispuesto en el artículo 121 del C.G.P., el cual es aplicable en materia laboral al no existir en esta regulación directa y expresa sobre el tema; sin que en el procedimiento laboral exista norma que excluya expresamente la aplicabilidad del referido artículo. Solicita que se declare que ha acaecido la causal objetiva de pérdida de competencia y se disponga la remisión del expediente al juez competente.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA.

ANTECEDENTES:

PRETENSIONES:

- Pretende la demandante que se condene a los demandados en forma conjunta, solidaria o separada, al reajuste de los aportes a la seguridad social en pensión y salud, teniendo en cuenta el salario realmente percibido por ella; o en forma subsidiaria, con base en el salario que se pruebe en el proceso; y los intereses moratorios.

HECHOS:

- Que laboró como abogada para el señor Ignacio Sanín Bernal, directamente para él o bien para las Sociedades demandadas de las que el mismo era socio o representante legal, a través de un contrato de trabajo, entre el 15 de marzo de 1998 y el 25 de febrero de 2013, cuando presentó renuncia.
- Que no obstante el salario devengado –los cuales relaciona-, los aportes efectuados a la seguridad social integral se hicieron por una cifra inferior -detalla los salarios tenidos en cuenta-.
- Que entre las Sociedades demandadas existió sustitución patronal.

TRÁMITE PROCESAL.

En audiencia del 19 de enero de 2021, en la etapa de saneamiento, EM AS JE S.A.S. en liquidación y JOHNATAN SANÍN MACÍAS, expresaron que no se ha vinculado al proceso a las personas que realmente fungieron como empleadores de la demandante, esto es, EM AS JE SANIN Y COMPAÑÍA S.C., IGNACIO SANÍN BERNAL Y COMPAÑÍA S.A. ABOGADOS y SANÍN ABOGADOS Y ASOCIADOS S.A., ya que las que fueron demandadas, pese a tener una razón social similar, no tuvieron tal calidad, pues como se

desprende de los certificados de aportes a la seguridad social, los aportantes fueron Sociedades diferentes. Que la demandada EM AS JE S.A.S se constituyó el 2 de enero de 2010 y se reconstituyó para continuar con los negocios de EM AS JE Y COMPAÑÍA S.A.S, que fue la que hizo los aportes cuestionados; y que **INVERSIONES PARA EDUCAR S.A.S.** se constituyó el 31 de julio de 2013 para continuar los negocios de Sanín y Asociados S.A., existiendo solución de continuidad en la reconstitución de Sociedades, siendo que las contingencias laborales no se transmiten a las nuevas Sociedades.

Por su parte, INVERSIONES PARA EDUCAR S.A.S. y ANTONIA SOFÍA SANÍN GÓMEZ expusieron que se debe dar aplicación al artículo 121 del Código General del Proceso - C.G.P.-, en el sentido de que el Juzgado de conocimiento perdió competencia para conocer del presente asunto, al haberse superado el término establecido en tal norma para dictar sentencia.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante Auto de fecha 19 de enero de 2021, el Juez del conocimiento negó tanto la solicitud de intervención de terceros, como la relacionada con la nulidad por pérdida de competencia, ambas planteadas por la parte demandada, ordenando continuar con el trámite del proceso.

Argumentó el A quo, que la legitimación en la causa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, es decir, que se debe resolver luego del debate probatorio; y que las personas que se pretenden vincular no tienen ningún derecho para ejercer al no formularse una demanda en su contra, remitiendo a lo ya decidido por este Tribunal en Auto del 20 de noviembre de 2019. Y sobre la pérdida de competencia, expuso que no se puede perder de vista la última fecha en que el Tribunal se pronunció; adicional a ello, en virtud de la pandemia ha existido suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura; y finalmente, que se debe dar prelación al derecho al Debido proceso y al Acceso a la administración de justicia.

APELACIÓN

EM AS JE S.A.S. en liquidación y JOHNATAN SANÍN MACÍAS.

Dice que las Sociedades antes mencionadas tienen el derecho a pronunciarse sobre lo que se debate, porque la decisión puede tener un efecto adverso a sus intereses, siendo este el momento procesal para vincularlos y salvaguardar el derecho de defensa y debido proceso.

INVERSIONES PARA EDUCAR S.A.S. y ANTONIA SOFÍA SANÍN GÓMEZ.

Expone que se debe revocar la decisión y declarar que el Juzgado no es competente para continuar conociendo del presente proceso, estando viciado de nulidad todo lo actuado a

partir del 21 de enero de 2021, en vista de que el término para contabilizar el plazo de un año, no es desde que el proceso regresó del Tribunal, porque esta fue una fecha posterior al inicio del mismo (año 2015), notificándose el último demandado en el año 2017, siendo este el momento para empezar a computar el tiempo, transcurriendo más de 3 años sin que se haya podido celebrar la audiencia del art 77 del C.S.T. y mucho menos terminar el proceso. Y que declarar la falta de competencia no significa negar el acceso a la administración de justicia, ya que el proceso pasaría al Despacho que le sigue en turno.

CONSIDERACIONES

- Competencia: Principio de Consonancia art. 66A del C.P. T. y S.S., adicionado, artículo 35 de la Ley 712 de 2001.
- Objeto: Determinar en el caso a estudio, si hizo bien o no el A-quo en negar la falta de competencia para continuar conociendo del presente asunto en los términos del artículo 121 del Código General del Proceso; así como la intervención de terceros. Veamos:

PERDIDA DE COMPETENCIA – NULIDAD.

El artículo 121 del C.G.P, para lo que interesa al caso en estudio, establece:

“DURACIÓN DEL PROCESO. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.

Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso...

Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso.

Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia...”.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-443 del 25 de septiembre de 2019 M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez, luego de considerar que tal medida legislativa “no contribuye eficazmente a la materialización del derecho a una justicia oportuna, sino que constituye un obstáculo para la consecución de este objetivo”; y que incluso puede atentar contra el debido proceso, el derecho de acceso a la justicia material, el de defensa e incluso el deber de garantizar una oportuna resolución de las controversias sometidas al sistema judicial, declaró la inexequibilidad de la expresión “de pleno derecho” contenida en el inciso 6 del artículo 121 del Código General del Proceso, y la exequibilidad

condicionada del resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es **saneable** en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso. Así lo manifestó:

“... En este orden de ideas, la Sala concluye que la calificación de pleno derecho de la nulidad de las actuaciones adelantadas por el juez que pierde la competencia por el vencimiento del término para concluir la respectiva instancia, vulnera el derecho la resolución oportuna de las decisiones judiciales, el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho al debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial. Por ello, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “*de pleno derecho*” contenida en el inciso 6 del referido precepto legal...

Según el artículo 132 del CGP, el juez tiene el deber de corregir y sanear los vicios que configuren nulidades al agotarse cada etapa del proceso, vicios que no pueden alegarse en las fases siguientes, salvo que se trate de hechos nuevos. Por su parte, según el artículo 135, esta no puede ser alegada por quien después de ocurrida la irregularidad, actúa en el proceso sin proponerla.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe entenderse que la pérdida de la competencia y la nulidad originada en este vicio **debe ser alegada** antes de proferirse la sentencia, esto es, **cuando expiren los términos legales contemplados en el artículo 121 del CGP**. Con ello se pone fin a la práctica denunciada en este proceso por algunos intervinientes, en la que las partes permiten el vencimiento del plazo legal y guardan silencio sobre la pérdida automática de la competencia, para luego alegar la nulidad del fallo que es adverso a una de ellas.

Por su parte, según el artículo 136 del CGP, la nulidad se entiende saneada cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla, cuando quien podía alegarla la convalidó expresamente, y cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no violó el derecho de defensa. Al declararse la inexequibilidad de la expresión “*de pleno derecho*”, la nulidad allí contemplada **puede ser saneada** en los términos anteriores. Por ello, si con posterioridad a la expiración de los términos para proferir sentencia se practicaron determinadas pruebas con sujeción a las reglas que garantizan el debido proceso, y en particular el derecho de defensa, tales actuaciones deben entenderse saneadas, al igual que si con posterioridad a dicho vencimiento, las partes intervienen en el trámite judicial sin alegar la nulidad de las actuaciones anteriores...”.

Así las cosas, conforme a lo antes expuesto, la pérdida de competencia prevista en el referido artículo 121 y la consecuente nulidad de lo actuado con posterioridad a ésta, no opera de manera automática, al contrario, la misma debe ser alegada por cualquiera de las partes antes de que se profiera la sentencia de fondo y no puede ser alegada por quien actuó en el proceso después de ocurrida la misma, pues en este último caso, según lo dispuesto en los artículos 135 inciso segundo y 136 numeral primero del C.G.P., estaría saneada.

En el caso de autos, no desconoce la Sala que el término para contabilizar el plazo de un año previsto en la norma bajo estudio se contabiliza a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, esto es, el **5 de diciembre de 2017**, cuando según consta en el folio 398 del archivo 02 digital, se notificó por conducta concluyente el último de los demandados -Johnatan Sanín Macías-, es decir que, tal lapso iba hasta el mismo día y mes del año **2018**.

Es decir, si bien es cierto desde tal fecha han transcurrido más de 3 años sin haberse dictado sentencia por el juez de instancia, también lo es que la eventual nulidad por pérdida de competencia se encuentra saneada, pues tanto la demandante como la plural parte demandada -incluidos los no apelantes-, han actuado en el proceso con posterioridad a la expiración del término para proferir sentencia, esto es, al 5 de diciembre de 2018, pues tal como consta en el fl. 548 del archivo digital 02, acudieron a la realización de la audiencia prevista en el artículo 77 del C.S.T., la cual se llevó a cabo el 16 de agosto de 2019, esto es, 8 meses después de expirado el referido término de 1 año; compareciendo, igualmente, a la audiencia en la que este Tribunal resolvió los recursos de apelación que en su momento interpusieron los apoderados de los demandados, realizada el 20 de noviembre de 2019 –fl. 613 ibidem-; sin que en una u otra oportunidad, ninguna de las partes hubiere manifestado inconformidad alguna en relación con el término dispuesto en el citado artículo 121 del C.G.P.

Finalmente, no se puede desconocer que en el caso de autos a las partes se les ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa que les asiste, y prueba de ello es que en dos oportunidades la plural parte demandada ha recurrido en apelación decisiones adoptadas por el juez de instancia, incluso las relacionadas con temas semejantes al que en esta oportunidad se debate como se explicará más adelante.

Consecuente con lo anterior, no es posible acceder a la aplicación del artículo 121 de C.G.P., debiéndose **CONFIRMAR** lo decidido por el juez de instancia al respecto.

INTERVENCIÓN DE TERCEROS - LITISCONSORCIO NECESARIO POR PASIVA.

Sobre el particular, considera la Sala al igual que lo hizo el juez de instancia en su oportunidad, que en la ya referida audiencia llevada a cabo el 20 de noviembre de 2019, en la cual la suscrita Magistrada también fue Ponente, se tuvo la oportunidad de resolver lo concerniente con la integración necesaria por pasiva con EM. AS. JE. Sanín y Cia S en C, Ignacio Sanín Bernal y Cia S.A. y Aerocatib S.A.

Y es que en tal decisión se concluyó que en el caso de autos es posible resolver el conflicto jurídico puesto a consideración del Juez laboral, **sin que se requiera de la integración necesaria de otros sujetos procesales diferentes a los aquí demandados**, pues la Sociedad EM. AS. JE. Sanín y Cia S en C, es hoy la demandada EM AS JE S.A.S. en liquidación, en virtud de la reconstitución que se realizó para continuar con los negocios de la primera, según se desprende del Registro Único Empresarial expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá -fls 25 a 27 del archivo digital 01-.

Y en el caso de la Sociedad Sanín Abogados Asociados S.A., que inicialmente se denominó Ignacio Sanín Bernal y Cia S.A. -la cual pretende el apoderado recurrente vincular al proceso-, se precisó que del Certificado de Existencia y Representación Legal de la codemandada INVERSIONES PARA EDUCAR S.A.S. en liquidación -fls 29 a 33 ibidem- se desprende que ésta se constituyó para continuar con los negocios de la primera referida Sociedad.

Aunado a lo anterior, se reitera que aunque una Sociedad diferente a las aquí demandadas haya hecho aportes en seguridad social por la demandante, lo cierto es que cada Sociedad debe responder por los aportes hechos por el tiempo de vinculación de la trabajadora, y es ésta quien elige a quien demandar, debiendo demostrar que a quien demanda es la responsable de lo que pretende y a esta última, que cumplió con su obligación, sin que Sociedades diferentes deban responder por las obligaciones que se le atribuyen a otra.

Así las cosas, se **CONFIRMARÁ** lo decidido por el juez de instancia.

Costas Procesales de segunda instancia a cargo de los demandados EM AS JE S.A.S. en liquidación, INVERSIONES PARA EDUCAR S.A.S., JOHNATAN SANÍN MACÍAS y ANTONIA SOFÍA SANÍN GÓMEZ vencidos en el recurso y a favor de la demandante. Agencias en derecho: 1 SMLMV a cargo de cada uno de ellos.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el 19 de enero de 2021, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por la señora **BEATRIZ EUGENIA GÓMEZ CORTÉS** en contra de **EM AS JE S.A.S.** en liquidación, de **INVERSIONES PARA EDUCAR S.A.S.** en liquidación, de **JUAN ESTEBAN SANÍN GÓMEZ**, de **ANTONIA SOFÍA SANÍN GÓMEZ**, de **EULALIA MARÍA SANÍN GÓMEZ** y de **JOHNATAN SANÍN MACÍAS** como herederos determinados del señor IGNACIO SANÍN BERNAL, de **MARÍA ESTELLA GÓMEZ DE SANÍN** en calidad de cónyuge de este, de los herederos indeterminados del mismo y de las vinculadas **EPS SURA** y **PROTECCIÓN S.A.**, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: Costas Procesales de segunda instancia a cargo de EM AS JE S.A.S. en liquidación, INVERSIONES PARA EDUCAR S.A.S., JOHNATAN SANÍN MACÍAS y ANTONIA SOFÍA SANÍN GÓMEZ. Agencias en derecho: 1 SMLMV a cargo de cada uno de ellos.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se firma en constancia.

Los magistrados;



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N° **109** de junio **24** de 2021.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>